



TRIBUNA DE SOCIEDAD Y POLÍTICA

Conferencia y Coloquios celebrados en el
Fórum Europa,
en Madrid, el 4 de febrero de 2004

Manuel Chaves
Presidente de la Junta de Andalucía

Con la colaboración de
ING Direct - BT - Mercadona

La necesidad de un nuevo clima político

1. El debate, consustancial al sistema democrático

1.1. *El deterioro del clima político*

Son malos tiempos para la expresión libre, para la información libre, son tiempos en los que se rehuye el debate, se condena a la televisión pública por manipulación informativa, se persigue al discrepante. Por ello, por permitirme hablar en público, y hacerlo con libertad y abierto a los medios de información plurales, gracias sinceras a Nueva Economía Fórum, un prestigioso lugar de encuentro y de debate.

Quiero exponer aquí algunas ideas sobre Andalucía y España, cuando apenas restan cuarenta días para la cita electoral del 14 de marzo. Es, pues, un momento idóneo para compartir algunas reflexiones sobre lo acontecido en los últimos años y también sobre los retos que debemos afrontar de inmediato. Lamentablemente, buena parte de estos retos y oportunidades se están quedando velados por el creciente deterioro y degradación de la vida política en nuestro país.

Es duro tener que recordar lo evidente, pero también es necesario. La campaña o precampaña electoral no puede ser nunca excusa para el disparate, la crispación gratuita, la deslealtad a las reglas de convivencia o la falta de respeto a los ciudadanos y ciudadanas. Si el debate político es consustancial al sistema democrático, ¿cómo es posible que todo el que se permita disentir sea de inmediato anatemizado? No he sido el único, y eso no me consuela. En los últimos años hemos oído el anatema en relación con todo lo que se movía: los universitarios y estudiantes contra la LOU y la Ley de Calidad de la Enseñanza, los trabajadores contra el “decretazo”, los nacionalistas –y algunas veces los socialistas–, que vuelven a ser considerados separatistas, los andaluces, que son indolentes.

¿No resulta extraño que un partido que se presenta como partido nacional, como único defensor de España, tenga tan mala opinión de un número tan amplio de españoles? Y este deterioro del clima político alcanza incluso a aquellos ámbitos en los que el consenso estaba más consolidado, como la lucha antiterrorista, que una vez más está siendo empleada directamente como arma arrojada en esta precampaña electoral. Creo que esta actitud debilita la propia lucha contra ETA y da un balón de oxígeno a los terroristas. Todos los que estamos contra la violencia, que somos la inmensa mayoría de ciudadanos y ciudadanas, deberíamos hacer un esfuerzo importante para mantener la unidad frente a ETA. La sociedad española no se merece que demos alas a quienes aún mantienen contra el viento de la historia la infame dialéctica de los puños y las pistolas.

1.2. La obligación de responder ante los ciudadanos

Pero el clima político también sufre un deterioro evidente ante la negativa del Gobierno de asumir sus propias responsabilidades políticas. Digámoslo con claridad: tenemos un Gobierno que mintió a los españoles y que sobre la base de esa mentira metió a España en una guerra. Hace sólo un año el presidente del Gobierno pidió solemnemente a los españoles que le creyeran cuando aseguraba que la guerra era inevitable, dada la existencia en Iraq de arsenales de armas de destrucción masiva. Y no fue una decisión venial, sino gravísima, adoptada contra la opinión de la inmensa mayoría de la opinión pública española, una decisión que no sólo desembocó en una guerra ilegal e injusta, sino que ha situado a nuestro país y a sus Fuerzas Armadas en un avispero llamado Iraq, donde la guerra civil es ya mucho más que un espectro y a diario se suceden los atentados y las muertes por decenas.

Dos de los tres miembros del club de las Azores, Bush y Blair, están dando la cara en sus respectivos países. ¿Es razonable que Aznar trate ahora de escurrir el bulto? ¿No debe una explicación a los españoles a través de la Diputación Permanente del Congreso o a través de una comisión de investigación independiente? Y otro tanto cabe decir de Rajoy, que avaló personalmente la política de su jefe de filas y que ahora pretende presentarse ante los ciudadanos como si el gran despropósito que ha sido y es la guerra y la posterior ocupación de Iraq no fuera con él; pero sí va con él, y también con la dignidad y la limpieza de la vida pública española. Vida pública española que también se deteriora por la ocupación y creciente instrumentalización de las instituciones democráticas por el Partido Popular. En Europa, la televisión española es puesta como ejemplo de sumisión al poder. Porque ¿en qué país de Europa se mantendría a un director de informativos condenado por manipulación? Y otro tanto se podría decir del fiscal general del Estado, que en tantas ocasiones a lo largo de los últimos años ha actuado como impagable abogado del Gobierno. O de las crecientes sospechas de que un informe del Centro Nacional de Inteligencia se ha utilizado con fines bastardos para desgastar a la oposición.

No puedo evitar detenerme en este último asunto por la zozobra e incertidumbre que para los ciudadanos supone la sospecha de que el Gobierno del Partido Popular ha empleado los servicios de espionaje para sacar rédito político. Hay quien sostiene que lo importante no es la filtración de la entrevista de Carod Rovira con ETA, sino la entrevista en sí; yo digo que la tranquilidad de los ciudadanos exige responsabilidad política ante ambos hechos. Carod Rovira ya no forma parte del Gobierno catalán, pero los ciudadanos también tenemos derecho a saber si el Gobierno ha empleado información suministrada por los servicios de inteligencia para desgastar a sus adversarios políticos. Aquí todo el mundo ha cumplido con su obligación menos el Gobierno, que está en la obligación de aclarar si ha puesto en peligro objetivos más relevantes de la lucha antiterrorista y si fue el propio presidente del Gobierno quien autorizó la filtración de dicho informe con objeto de provocar la ruptura del Gobierno tripartito catalán y desgastar las expectativas electorales del Partido Socialista.

Ya he recordado cómo un año atrás el presidente del Gobierno pidió solemnemente a los españoles que le creyeran cuando aseguró que en Iraq se almacenaban armas de destrucción masiva; ahora yo pido a Aznar y a Rajoy que

con la misma solemnidad den su palabra a los españoles de que no conocían ni autorizaron la filtración del informe el Centro Nacional de Inteligencia con fines políticos y partidistas. Me permito recordarle a Aznar que sus mentiras sobre esos arsenales han tardado apenas un año en quedar en evidencia; tal vez en este asunto del Centro Nacional de Inteligencia no hayamos de esperar tanto tiempo.

Son demasiadas cosas ya para que puedan compensarse con un monótono discurso sobre la situación económica, por varias razones. Por un lado, porque siendo indispensable asegurar siempre –y también lo será en el inmediato futuro por parte de un Gobierno socialista– la estabilidad, el crecimiento, el empleo, las grandes cifras macroeconómicas, son datos que se limitarán a generar alegría en sus propulsores si no trasladan sus efectos al conjunto de los ciudadanos, y basta recordar el decremento padecido en estos años en el gasto social para poder afirmar sin ambages que la política económica del Partido Popular se ha hecho a costa de la solidaridad, de la cohesión, de la atención social. Por otro lado, porque la situación económica de España es fruto de algo más que el genio de Rato o el milagro de Aznar, es la consecuencia de 25 años de gestión democrática de la economía en la que los distintos gobiernos han debido hacer frente a los retos que exigía cada fase de la construcción colectiva de un país moderno y democrático, y, entre otras cosas, es también la consecuencia de nuestra presencia, pertenencia y permanencia en la Unión Europea, un hecho que nos ha proporcionado claves esenciales para nuestro desarrollo y modernización. Una y otra cosa nos dan garantías de estabilidad suficiente, aunque, ciertamente, la actitud del Partido Popular ante la Unión Europea ha puesto en serio peligro la persistencia de las oportunidades que hasta ahora nos ha proporcionado.

1.3. La tensión del debate territorial

Es necesario reflexionar sobre el conjunto de tensiones territoriales que aquejan a España. El Partido Popular sólo sabe construir la identidad de España y su identidad como partido destruyendo y sofocando cualquier otra identidad que surja en sus respectivos senos. Tratan a todos los demás como si fueran cómplices de Batasuna cada vez que proponen una reforma constitucional o estatutaria. Lo más serio, sin embargo, es que con esta actitud, cuando la refieren a España, no sólo renuncian a la riqueza que siglos de historia común han abonado favoreciendo la diversidad de nuestros pueblos, nacionalidades y regiones, hay algo más grave, cómo lo adornan con las manifestaciones más rancias del nacionalismo de combate, cómo multiplican las tensiones con quienes, deseosos de compartir un proyecto común, se resisten sin embargo a admitir el uniformismo o a aceptar que hay una sola forma de entender, de amar y de defender a España.

Las consecuencias también se conocen y se padecen ya. Nunca como ahora se había cuestionado la legitimidad de gobiernos autonómicos, no sólo la de los nacionalistas, sino también la de todos aquellos en los que el Partido Popular, por decisión de los ciudadanos, ha sido derrotado en las urnas. Nunca

como ahora se había intentado recortar las competencias ya transferidas y legalmente ejercidas por las comunidades autónomas. Nunca como ahora se había tensionado tanto el debate territorial de España. Y en todos los conflictos siempre aparece de un modo u otro la larga mano del Gobierno y del Partido Popular. Una concepción autoritaria del poder como la del Partido Popular se extiende a todos los ámbitos de la vida pública, y desde luego al de la vida política. Del deterioro del Parlamento da cuenta suficiente el enésimo episodio por el que la mayoría parlamentaria impide que el Gobierno dé cuentas sobre decisiones gravísimas o sobre sucesos que escandalizan a la opinión; fue así en la guerra de Iraq, está siendo en la filtración interesada desde Moncloa del informe del Centro Nacional de Inteligencia sobre Carod Rovira.

2. La situación de Andalucía

2.1. Las difíciles relaciones con el Gobierno central

Los andaluces nos hemos sentido hostigados, acosados por este Gobierno, que no ha accedido a abrir el más elemental espacio de acuerdo con la Junta de Andalucía en casi ningún ámbito. Un ejemplo de ello es la financiación autonómica, asunto en el que el Gobierno reconoce sin empacho que adeuda 2.500 millones de euros a la comunidad autónoma, pero que no los paga hasta que gobierne en Andalucía el Partido Popular. Con esa claridad lo dijo en Sevilla el ministro Montoro, aunque luego haya balbuceado alguna suerte de rectificación. Pero la rectificación mayor, que sería pagar lo que se debe y se reconoce que se debe, ésa aún no ha llegado. Y como éste se podrían poner varias decenas de ejemplos, como los metros de Sevilla, Granada o Málaga, alguna de cuyas obras ya han comenzado sin que el Gobierno se haya dignado a comprometer la cofinanciación en las mismas condiciones que otras ciudades españolas; o el caso de las células madres embrionarias, cuando ha tratado de boicotear el banco de células de Granada mientras negociaba su instalación en otras comunidades autónomas.

Pero de este hostigamiento lo dice prácticamente todo el hecho de que el presidente del Gobierno se haya negado sistemáticamente a recibirme, como a otros presidentes de comunidades, para tratar asuntos de interés común durante los ocho años de su mandato, salvadas las dos ocasiones en las que lo ha hecho protocolariamente tras sus dos tomas de posesión y siempre en el marco de los encuentros formales con el resto de presidentes autonómicos y otras autoridades del Estado.

Creo que todas estas actitudes también contribuyen a la degradación del clima político y avivan tensiones territoriales que nunca antes habían aflorado, y todo ello, como señalaba al principio, enturbian seriamente el clima político en España e impiden abordar con tranquilidad los grandes retos y desafíos que tenemos los españoles por delante.

2.2. La economía y el empleo

2.2.1. El cambio estructural en la economía andaluza

Lo primero que hay que señalar es que la situación económica es buena, hay dinamismo empresarial. Desde hace una década crecemos de manera ininterrumpida y de forma más intensa que las economías de nuestro entorno, de modo que se está registrando una trayectoria de convergencia sostenida y efectiva. Los resultados de este dinamismo económico son evidentes. Entre los años 2000 y 2003 el crecimiento del producto interior bruto andaluz ha sido del 14,5%, superior en casi 3 puntos al de España y más del doble que el de la Unión Europea.

El crecimiento del empleo fue del 18,3%, casi 5 puntos superior al de la media española y cuatro veces por encima del experimentado en la Unión Europea, de manera que en cuatro años se han creado en nuestra comunidad 420.000 empleos, es decir, uno de cada cinco empleos creados en España lo han sido en Andalucía. Y estos datos permiten afirmar que en relación al empleo y la economía lo que en España crece en cuatro años en Andalucía lo hace prácticamente en tres, ésta es la base de nuestro dinamismo diferencial y de nuestra velocidad de convergencia. Este hecho refleja un auténtico cambio estructural en la economía andaluza, pues hasta ahora ante ciclos débiles respondía con tasas de crecimiento inferiores a las de su economía de referencia.

2.2.2. Los desafíos de España y de Andalucía

A) Aumentar la productividad

No obstante, hay que señalar que la economía andaluza todavía dista, como es conocido, de haber alcanzado en el conjunto del país un valor semejante a su peso poblacional y que por tanto hay que continuar el esfuerzo por mantener y acelerar en la medida de lo posible esta trayectoria de convergencia. Para ello, hay que abordar dos cuestiones claves tanto para Andalucía como para la economía española con el fin de alcanzar mayores niveles de productividad. Los mayores niveles de competitividad que exigen los mercados globales requieren una respuesta contundente de nuestro sistema productivo en forma de mayores niveles de productividad. Pues bien, en este terreno los “deberes” no se están haciendo bien. Basta un dato: si hace siete años la productividad en España crecía al 1,7%, ahora lo hace al 0,6%. Esto tiene un coste año tras año, sobre todo en la medida en que, como sostienen recientes estudios, las diferencias de productividad explican a largo plazo más del 90% de las diferencias del crecimiento de sus rentas *per cápita*.

1. Un esfuerzo mayor en investigación y desarrollo

Si el problema está bien claro, los caminos que hay que recorrer para abordarlo también: mayor esfuerzo en investigación, desarrollo e innovación y menor precariedad en el empleo. Según datos del Ministerio de Ciencia y Tecnología, sólo un 29% de las empresas españolas pueden ser calificadas como innovadoras, frente a una media del 59% de la Unión Europea. El gasto en I+D en España representa el 1% del producto interior bruto, incluyendo los gastos en investigación militar; en Andalucía es del 0,62%; en la Unión Europea este indicador se sitúa en el 2%.

Además, el gasto en investigación y desarrollo en Andalucía correspondiente al sector público representa dos tercios del total y en el promedio español algo menos de la mitad. Es decir, en términos comparativos, invertimos en investigación y desarrollo la mitad que nuestros competidores europeos, y en Andalucía el mayor esfuerzo –dos tercios– corresponde a las Administraciones públicas y a las universidades, y esto en un contexto en el que Europa quiere convertirse en una economía competitiva y líder a escala planetaria, para lo cual se ha fijado como objetivo alcanzar en el año 2010 un gasto en investigación y desarrollo del 3% del producto interior bruto.

Ni Andalucía, ni las comunidades autónomas, ni España pueden estar solas en este esfuerzo modernizador, ni el Gobierno de España puede abdicar de sus responsabilidades. Este objetivo sólo es posible alcanzarlo a través de un gran acuerdo nacional de convergencia tecnológica en el que participen el Gobierno central y las comunidades autónomas, un acuerdo que sume esfuerzos, aúne voluntades y contribuya así a crear las sinergias necesarias para reducir la brecha tecnológica y de competitividad que separa a España de Europa.

2. El uso eficiente del capital humano

El segundo factor sobre el que hay que actuar para elevar la productividad lo constituye el uso que hacemos del capital humano. Y es que, paradójicamente, cuando contamos con la mayor cualificación laboral y profesional de nuestra historia no hacemos un uso eficiente de esos recursos. Y es que contamos con un mercado laboral caracterizado por un alto grado de ineficiencia, que se expresa en un exceso y en una injustificada temporalidad que afecta ya a más del 30% de los trabajadores de este país y a más del 40% en Andalucía. Cada año, 9 de cada 10 nuevos contratos son temporales, desbordando cualquier definición razonable de la temporalidad de esos puestos de trabajo y haciendo añicos el principio de la causalidad; se formalizan contratos por períodos inferiores al mes y, en algunos casos, inferiores a la semana. Todo ello, naturalmente, tiene una incidencia negativa en la productividad, por no hablar de otras consecuencias indeseables, como los índices de siniestralidad, en concreto, dichos informes han señalado que la siniestralidad cuesta anualmente en España el 1,7% del producto interior bruto.

B) Cambiar la cultura de la precariedad por la cultura de la estabilidad

Evidentemente, hay que poner coto a esta situación y cambiar la cultura de la precariedad dominante en el mercado de trabajo por la cultura de la estabilidad, y para ello hay que actuar en una triple dirección: modificar la legislación laboral básica a fin de reducir las modalidades de contratación laboral y garantizar que las que se mantengan respondan estrictamente al principio de causalidad; reforzar la inspección de trabajo para disuadir y evitar todo tipo de abusos que puedan producirse; y, por último, un mayor esfuerzo de formación que permita mejorar nuestro capital humano a lo largo de toda su trayectoria laboral. Para la puesta en marcha de todas estas iniciativas es necesario la participación de todos los agentes responsables –sindicatos, empresarios, Gobierno central y Gobiernos autonómicos–, sólo el compromiso y la responsabilidad de todos permitirá acabar con este problema que no es propio de una sociedad moderna.

En estas páginas se han transmitido algunos de los retos que Andalucía y España tienen por delante, retos cuya envergadura exigiría un panorama político más limpio, menos degradado y presidido por una mayor altura de miras y, sobre todo, presidido por aquellos que la tienen. Confiamos en que las próximas elecciones despejen el clima político y nos permitan afrontar dichos retos y desafíos con determinación y perspectivas de éxito.

COLOQUIO

- Moderador. ¿Plantean las próximas elecciones autonómicas como un referéndum constituyente para la reforma del Estatuto?

- Manuel Chaves. No, no es un referéndum sobre la reforma del Estatuto de Autonomía. La reforma del Estatuto de Autonomía es un elemento más de la propuesta electoral que hace el Partido Socialista para los próximos años. Nosotros hemos lanzado el proyecto de la segunda modernización de Andalucía para los próximos años para ubicar a Andalucía en lo que se denomina “la sociedad del conocimiento y de la información”, para abordar nuevos retos ante los cambios que se han producido en el mundo, en Europa y en España, cambios tecnológicos, cambios económicos, cambios sociológicos, cambios que no fueron tenidos en cuenta por el Estatuto de Autonomía cuando éste se aprobó hace más de veinte años. Lo que pretendemos con la reforma del Estatuto es hacer un instrumento jurídico que forme parte del bloque constitucional, hacerlo mucho más funcional y eficaz, mucho más moderno y por lo tanto más operativo, sobre dos bases que para mí son esenciales en cualquier reforma de un instrumento de esta categoría: el consenso -busco y quiero encontrar el consenso de todas las fuerzas políticas porque el Estatuto tiene que seguir siendo una norma de todos- y el respeto escrupuloso del marco constitucional.

- M. ¿Cómo se plantea un gobierno de coalición si no obtiene mayoría absoluta?

- M. C. Lógicamente tengo la ambición legítima –y creo que también es una ambición democrática– de gobernar con mayoría absoluta, espero que eso pueda ser así, pero también soy consciente de que la mayoría absoluta en Andalucía –una región con ocho distritos electorales, con cuatro o cinco partidos que concurren a las elecciones– es un objetivo difícil de conseguir. Por lo tanto, cabe la hipótesis de que haya que gobernar en coalición con algunos de los partidos que están en el espectro electoral de Andalucía. Tengo que decir que para mí la coalición con el Partido Andalucista durante estos años ha marchado razonablemente bien, por lo tanto, no tengo en estos momentos ningún criterio, ningún indicador o ninguna razón que me impida continuar con esa coalición si no obtengo esa mayoría absoluta. Por lo tanto, mi predilección, mis preferencias en estos momentos van por el Partido Andalucista, pero soy consciente también de que tengo que esperar a los resultados electorales e interpretar el voto de los ciudadanos, interpretar las urnas, porque también creo que del voto de los ciudadanos el 14 de marzo se pueden sacar las conclusiones oportunas para tomar una decisión.

- M. ¿Qué medidas piensa aplicar en Andalucía para que Canal Sur siga el modelo de televisión pública que propugna Zapatero?

- M. C. Cuando José Luis Rodríguez Zapatero ha avanzado esa iniciativa lógicamente hace ya tiempo que la estaba madurando y también tiempo durante el cual hemos tenido ocasión de hablar. Quiero decir lo siguiente -y como eso está en las hemerotecas puedo remitirme con claridad a esas hemerotecas-: primero, hemos sido un Gobierno que remitió al Parlamento hace varios meses un proyecto de ley creando el Consejo Audiovisual de Andalucía compuesto por personas independientes, que no es lo mismo que la Comisión de Independientes que ha propuesto José Luis Rodríguez Zapatero; segundo, hemos propuesto también la necesidad de que haya una norma marco para todo el Estado español que regule la estructura, organización, contenidos y procesos internos de todas las televisiones públicas que hay en España, las de titularidad estatal y las de titularidad autonómica, lo hemos propuesto hace muchos meses. En consecuencia, lo único que puedo decir es que los trabajos de la Comisión Independiente que ha sido propuesta por José Luis Rodríguez Zapatero serán trabajos que también condicionarán a la Junta de Andalucía y a mi Gobierno.

- M. ¿Por qué los partidos o los dirigentes políticos cuando están en la oposición quieren debates cara a cara –y corrijáme si estoy equivocado–, pero cuando están en el Gobierno no quieren debates cara a cara con la oposición?

- M. C. Yo creo que ésa pregunta habría que hacérsela a Teófila Martínez y a Rajoy; uno está en el Gobierno y no quiere debates, otra está en la oposición y tampoco quiere debates, esto es un poco absurdo, sobre todo para quien está en la oposición. Yo lo que puedo decir es que estoy en el Gobierno y, más allá de que me pueda o no me pueda interesar electoralmente un debate, siempre he propuesto debates en las campañas electorales de Andalucía y he propuesto para estas elecciones debates en Canal Sur. Creo que debe de haber debates a través de los medios, sobre todo de las televisiones, pues es la mejor manera de transmitir a los ciudadanos las propuestas, el contraste, la comparación. Hurtar el debate a los ciudadanos en los medios de televisión no habla muy bien de la sensibilidad y el talante democrático del Partido Popular.

- M. ¿Va a costar votos al PSOE o al PSOE en Andalucía el 14-M lo que ha sucedido con Carod Rovira?

- M. C. No lo sé, habrá que estar a las encuestas que salgan en los próximos días. Los datos de la última encuesta publicada en un medio de comunicación parecen dar a entender que la crisis del Gobierno de la Generalitat de Cataluña ha tenido efectos neutrales y, por lo tanto, no ha tenido un efecto sobre el electorado en estos momentos. Pienso la crisis de la Generalitat se ha resuelto bien, el secretario general del Partido Socialista y el presidente de la Generalitat han asumido su responsabilidad política al resolver la crisis. Y creo que hay que respetar a un Gobierno, cosa que no se hizo desde el principio, nos guste o no nos guste, les guste o no les guste a Aznar y a Rajoy. Hay que respetar a un Gobierno legítimamente constituido, democrático, que tiene el respaldo del 59% de los ciudadanos catalanes, un Gobierno que se ha visto acosado desde el primer momento de su constitución, no porque en ese Gobierno estuviera

integrado Esquerra Republicana de Catalunya, sino porque estaba presidido por un socialista, Pasqual Maragall. Es hora ya de que el Gobierno de Aznar respete a los Gobiernos legítimamente constituidos, democráticamente respaldados por sus respectivos pueblos.

- M. ¿Cómo cree que evolucionará esta crisis en el seno del PSOE? ¿Está de acuerdo con quienes dicen que una vez más se han puesto sobre el tapete las diferentes sensibilidades entre Chaves, Rodríguez Ibarra y Bono, por un lado, y, por otro, Maragall y Odón Elorza?

- M. C. Creo que las sensibilidades son las mismas. Es un tema que ha sido resuelto y bien resuelto asumiendo sus responsabilidades entre el secretario general y el presidente de la Generalitat. Se toma una decisión delicada en un momento difícil, y eso lógicamente provoca tensiones, pero más allá no hay ninguna preocupación en cuáles puedan ser las relaciones entre el Partido Socialista Obrero Español y el Partido de los Socialistas catalanes. Dentro del Partido Socialista –del PSOE y del PSC– se han asumido las responsabilidades políticas, lo importante es que el tema se ha resuelto bien, el señor Carod Rovira ya no forma parte del Gobierno de la Generalitat. Ahora hay otras personas que tienen que asumir su responsabilidad política, y éste es un tema grave que si no se sabe ahora se sabrá más tarde, si ha habido o no utilización de un informe de los servicios de inteligencia del Estado. Ésa es una pregunta que no se puede responder ante los medios de comunicación o sólo ante los medios de comunicación, es una pregunta a la que se debe responder en el Congreso de los Diputados o a través de una comisión de investigación.

En una sociedad democrática, en un Estado moderno, que pueda haber ocurrido esto es realmente grave. Tan grave como que no se diga nada, que ni Rajoy ni Aznar den la cara cuando ya parece una certeza que no hay armas de destrucción masiva en Iraq, y cuando Bush y Blair están dando la cara. No me parece propio de un presidente del Gobierno, que lamentablemente puede –y ojalá me equivoque– terminar su mandato como un gran mentiroso.

- M. ¿No considera usted que ya quedó demostrado en las elecciones autonómicas y municipales que el caso de la guerra de Iraq no tiene influencia directa en los electores?

- M. El tema no es si tiene o deja de tener incidencia electoral, la cuestión es si ha habido o no mentiras y se ha llevado –en contra de la opinión pública mayoritaria española– a un país a la guerra basándose en una mentira. Lo que están tratando de dilucidar tanto Blair como Bush lo debe aclarar también Aznar, independientemente de los efectos electorales que pueda tener para el Partido Popular o para el Partido Socialista. Es necesaria mucha transparencia y claridad en este tema porque las Fuerzas Armadas españolas están allí, en un avispero donde cada día surgen más datos de que prácticamente ya se trata de una guerra civil, porque ya solamente se cuantifican las víctimas de las Fuerzas Armadas de

la coalición, pero no se cuantifican las víctimas –decenas, centenares de ellas– de la población civil de Iraq.

- M. Hoy ETA ha hecho público un comunicado en el que sitúa la entrevista con Carod Rovira como una reunión de representantes de pueblos oprimidos de España. ¿Qué le parece?

- M. C. Es absolutamente deleznable, lo hemos dicho en muchas ocasiones en relación con la entrevista de Carod con representantes de ETA. Cualquier entrevista con representantes de la banda terrorista es condenable y, por supuesto, rechazamos ese tipo de declaraciones.

- M. Desde su Gobierno autonómico, ¿cómo se plantea abordar la situación contra las mujeres que mueren por la violencia de género?

- M. C. Creo que ése es uno de los problemas más graves que tiene la democracia española, porque mientras estamos trabajando –y estamos trabajando bien– por la paridad, por la igualdad de oportunidades, ocurre que cada cinco días una mujer es asesinada en España por su compañero, por su marido o por su novio. Es decir, esas “menudencias” de las que habla Fraga Iribarne o esa “intimidad” de la que hablan algunos concejales del Partido Popular provoca cada cinco días un asesinato en España. Por lo tanto, respondiendo de una manera muy breve, yo comparto lo que ha dicho mi secretario general, José Luis Rodríguez Zapatero, de que la primera ley que va a presentar en el Parlamento español es una ley integral contra la violencia de género, que es la ley que nos ha faltado durante este tiempo. La violencia de género no se puede combatir con parches, con medidas parciales, sino que hay que combatirla de una manera integral y con líneas de actuación integrales y horizontales.

- M. Pase lo que pase el 14-M, ¿Rodríguez Zapatero “aguantará”?

- M. C. Pase lo que pase. Como presidente del Gobierno aguantará muy bien, eso es lo que va a pasar.

- M. Hay quien dice que el siguiente líder del PSOE es usted.

- M. C. En Andalucía espero seguir siéndolo. Mi horizonte político está y seguirá estando en Andalucía y, por supuesto, desde Andalucía y como presidente del partido apoyando a mi secretario general y al futuro presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.